

Pasado y presente de disputas sobre el bienestar

Oswaldo Battistini

En el momento en que comenzamos a programar la revista y establecimos las temáticas a abordar en los primeros dossiers, en nuestras perspectivas de mediano plazo no se presentaba como alternativa la posibilidad del retorno de experiencias económicas y políticas neoliberales.

Tras los gobiernos neoliberales que comenzaron a instalarse en la región a fines de los setenta y las posteriores debacles económicas y políticas producidas por los mismos a fines del siglo XX, los proyectos políticos que los sucedieron en varios países latinoamericanos, junto al invalorable rol de distintas organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, parecían haber contribuido a crear suficientes alertas sociales como para impedir el retorno de políticas de ese tenor.

Hoy, vemos con asombro la expansión del neoliberalismo en varios de esos países y su consolidación en otros territorios de nuestro continente. El auge neoliberal ha llegado a Argentina luego del triunfo electoral de Macri, y a Brasil a partir del golpe institucional que encaramó a Temer en el poder. Al mismo tiempo que se estabiliza y fortalece en Colombia, México y Perú, amenaza a Venezuela, bajo presiones internas de grupos políticos de derecha y externas encabezada por Estados Unidos y apo-

yada fervientemente por los gobiernos neoliberales de la región. Por su parte, en Chile el proyecto neoliberal parece contar con fuertes posibilidades de retorno en las próximas elecciones.

El actual contexto político latinoamericano pone en duda la capacidad de sus pueblos para generar mecanismos económicos, políticos y culturales que sean capaces de neutralizar el influjo ideológico del liberalismo. La experiencia neoliberal actual demuestra que esos mismos países no pudieron impedir el retorno de políticas que terminen poniendo nuevamente en jaque a sus economías, que vuelvan a implementarse medidas promovidas desde el centro de la economía mundial y que se debilite el sostenimiento futuro de esos países a costa de los intereses de los grupos más concentrados de la economía.

En el contexto político anterior, casi nos parecía ineludible dedicarle los primeros números de Ensamblés a realizar un recorrido sobre las transformaciones económicas, políticas y culturales desarrolladas durante los quince años que precedieron al nacimiento de nuestra Revista. Al mismo tiempo nos proponíamos reponer una perspectiva latinoamericana comprehensiva, que pueda identificar y analizar las diferencias, ver los matices y establecer los parecidos,

tanto sobre el presente como sobre el pasado reciente.

De esta manera, estábamos anticipando alguna lectura que nos permitiera realizar comparaciones y encontrar parámetros para indagar acerca de cuáles fueron las causas del advenimiento liberal actual y de las transformaciones que a partir del mismo se plantean para la región. En el presente número, concentrándonos en este último proceso de cambio estructural, que plantean los nuevos tiempos, buscamos indagar acerca de las formas del bienestar, sus implicancias sociales, económicas y políticas, las distintas perspectivas teóricas para su entendimiento, las formas que ha adoptado a lo largo de la historia, así como sus efectos y contradicciones actuales en las distintas sociedades latinoamericanas.

Pretendemos, a lo largo de varios de nuestros números, contar con herramientas para poder observar la manera en que los diferentes proyectos políticos y económicos solapados entre el pasado reciente progresista y el presente neoliberal dan paso a una experiencia por demás novedosa, en términos no sólo de reconfiguración veloz de la economía en general y de la estructura socio-productiva en particular, sino también acerca de qué modelos de sociedad se ponen en juego y, a partir de ello, cómo se produce la disputa sobre las ideas de bienestar.

Como introducción breve a esos debates y para poder analizar desde dónde y cómo se pueden estructurar las disputas entre distintas ideas de sociedad, proponemos, en primer lugar, recorrer el camino hacia atrás, hacia nuestra historia reciente.

A fines de los años noventa del siglo

XX, diferentes gobiernos progresistas encarnaron salidas a las crisis económicas y políticas resultado de los efectos de las políticas neoliberales y el consiguiente seguimiento a rajatabla de los preceptos de los organismos internacionales de crédito, que reinaron en territorios de varios países latinoamericanos hasta entonces. Ese nuevo proceso, que comenzó pocos años después de iniciado el nuevo siglo, tendió a la reparación paulatina de la economía y la recuperación de la confianza en la política en distintos países de la región. Las medidas tomadas por los nuevos gobiernos se encaminaron a la ardua tarea de mejorar el empleo, el ingreso salarial de la población, reducir los índices de pobreza e indigencia, facilitar la incorporación de importantes sectores de la población a la educación y, desde allí, restablecer medianamente alguna forma de bienestar para los sectores populares.

Particularmente en Argentina, a lo largo de los doce años del kirchnerismo en el poder se produjo una fuerte caída del desempleo, se redujeron sustancialmente la pobreza y la indigencia y se volvió al nivel de ingreso previo a la crisis de 2001, sin embargo, en ninguna de esas variables se logró alcanzar los niveles de mediados de los años setenta del siglo pasado, anteriores a la última dictadura militar. El período predictatorial y el que se vivió entre 2003 y 2015 pueden ser considerados como dos intentos diferentes de establecimiento de formas de bienestar, entre los cuales se produjo la primera experiencia neoliberal, que se prefigura en esa dictadura y alcanza su grado máximo a partir del gobierno de Carlos Menem. Este nuevo bienestar (correspondiente al kirchnerismo) se an-

claba fundamentalmente en cierta democratización del consumo, más que en la reestructuración socioeconómica del país mediante la transformación integral del modelo de acumulación vigente hasta entonces y la consolidación de una distribución del ingreso más igualitaria. Este sesgo entonces, impidió una real transformación del patrón de acumulación que permitiera resolver los males que aquejan a la economía nacional, ligados a: una fuerte fragmentación entre sectores productivos, la precarización de gran parte de la población trabajadora, escalas salariales fuertemente diferenciadas entre distintos grupos laborales, diferencias sustanciales en los ingresos, no sólo entre ricos y pobres, sino al interior de distintos grupos de trabajadores, una fuerte dependencia externa de gran parte de la industria, ausencia de programas destinados a promocionar y diversificar la producción, etc. Una de las consecuencias directas de este proceso es que no se revirtió la fuerte individualización y fragmentación social y cultural profundizada por el neoliberalismo de los noventa.

Bajo el kirchnerismo, en nuestro país la movilización que expresaron los sectores populares, desde mediados de los noventa hasta la crisis de 2001, cambió de sentido. Los movimientos de desocupados, que presentaron en las calles, desde mediados de los noventa, el máximo grado de protesta social, fueron reemplazados por los sindicatos de los distintos sectores de la producción, que pasaron a constituirse en protagonistas principales del conflicto capital-trabajo. Las organizaciones sindicales retomaban no sólo el conflicto, sino que expresaban también otra forma de

negociación frente al Estado y a los empresarios, al mismo tiempo que participaban directa o indirectamente de la puesta en marcha de políticas económicas encaradas por el nuevo gobierno. A su vez, parte del conflicto social comenzó a descentrarse, ya que surgieron fuerzas opositoras que, con fuerte amplitud e impacto, se organizaron primero alrededor de demandas de “seguridad” (como las marchas organizadas por el padre de Axel Blumberg, por el secuestro y posterior asesinato de éste último). Luego, las que, en 2008, nuclearon a los grandes y medianos empresarios del sector agrícola-ganadero y parte de la clase media para impedir modificaciones en las alícuotas de las retenciones a las exportaciones de productos del campo. Finalmente, aquellas que se conformaron como síntesis de las dos anteriores y constituyeron los movimientos que protagonizaron varias protestas contra el gobierno, tomando la forma primero de “cacerolazos” y luego de manifestaciones multitudinarias. Se trató de expresiones de protesta ancladas en reclamos dirigidos contra el gobierno, por las regulaciones impuestas al mercado del dólar, por ciertas denuncias de corrupción y por el inconformismo acerca de la intervención estatal en la economía. De esta forma, estas últimas organizaciones enunciaban, en sus consignas públicas, parte de lo que el bloque opositor iba a levantar como banderas electorales e iba a poner en marcha, como medidas de gobierno, a partir de su llegada al poder, tras las elecciones de 2015.

Así, esas manifestaciones populares, dieron cuenta de al menos dos formas de expresión de lo social que se fueron

desplegando por caminos distintos, pero sin formular absolutamente su real antagonismo. Por un lado, las organizaciones sindicales articulando el conflicto desde su lógica tradicional y, concentrando sus demandas principalmente alrededor de la problemática salarial, lo cual acordaba coyunturalmente con la política gubernamental de promoción del consumo. De esta forma, el progreso de los trabajadores se anclaba fundamentalmente en el progreso de sus ingresos y su creciente capacidad de consumo. Por otro lado, las movilizaciones ligadas a los empresarios del campo, a las clases medias ideológicamente emparentadas y a un sector de la justicia, alternando protestas contra posibles hechos de corrupción, el reclamo por la inseguridad, contra la intensión gubernamental de reformar la justicia o en demanda por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman (inculpando directamente al gobierno por ese hecho). Pero, ninguno de ellos exteriorizaba, en forma precisa y concreta, lo que estaba en juego: el tipo de sociedad que cada uno de ellos pretendía. Las demandas, necesariamente coyunturales, no significaban muestras palpables de tales intenciones, pero las consignas y algún enfrentamiento explícito (por ejemplo, el que se produjo durante protestas del sector agrícola) ponían de manifiesto esta tensión.

Mientras tanto, gobierno y trabajadores coincidían que el bienestar no podía ser negociado, sólo debía ser incrementado, dado que para el primero se trataba de la fórmula que garantizaría el crecimiento y para los segundos su proyecto de progreso personal y familiar. Ese bienestar sólo podía ser incrementado,

y el mecanismo para hacerlo era el único disponible hasta entonces, el crecimiento del empleo y el aumento salarial, en lo posible superando o equiparando la inflación. Pero, un nuevo contexto colocaba al gobierno en una encerrona que no podía resolver en forma favorable a tales objetivos. Las dificultades para obtener financiamiento externo se incrementaban ante la crisis económica internacional que sobrevino a fines de la primera década del siglo XXI, frente a ello resultaban absolutamente necesarios los recursos generados al interior del país, sobre todo los correspondientes a commodities provenientes del agro. Pero a las restricciones externas, se sumaron las originadas por el conflicto interno. Las divisas provenientes de las exportaciones de soja no llegaban al país, dado que los productores no vendían su producción esperando una devaluación que incrementase su ganancia en dólares –presionando de esta forma por ella– y/o la reducción de las retenciones. Al mismo tiempo, los instrumentos institucionales implementados para contener el valor de esta moneda resultaban en la generación de un mercado paralelo de divisas que finalmente ejercía presión sobre los precios y así producía el crecimiento constante de la tasa de inflación. A todo esto, se sumaba la feroz campaña contraria al gobierno que ejercían los medios de comunicación de mayor difusión. Los tiempos para generar un modelo de crecimiento alternativo se hacían cada vez más cortos y la relación de fuerzas se volvía cada vez menos favorable para encararlo. Las tensiones inflacionarias repercutían sobre los precios y los salarios, en una escalada difícil de ser controlada en las condiciones antedi-

chas. La reducción de los ingresos estatales –por falta de financiamiento externo y la baja en la liquidación de los commodities– hizo más significativo lo recaudado a través de los impuestos al consumo y a las ganancias. Sin embargo, la carga impositiva sobre los salarios más elevados de los trabajadores generó cada vez más inconvenientes en este frente. Los aumentos de salarios, producidos por la negociación colectiva, y la elevada alícuota aplicada sobre los de menor rango produjo un alto grado de descontento entre quienes quedaban alcanzados por los mismos. De esta forma, la tensión se trasladaba ahora a la relación entre el gobierno y los sindicatos, sobre todo con aquellos que contaban entre sus filas a quienes veían reducidos sus ingresos producto de este impuesto. Así, una parte importante de quienes se habían constituido en un primer apoyo del gobierno kirchnerista, pasaban ahora a la oposición. El bienestar alcanzado durante estos años pasaba ahora a ser cuestionado por una parte de quienes habían sido favorecidos por aquellas políticas. El gobierno que había generado ese proceso encontraba grandes dificultades para garantizar su continuidad, por lo menos bajo las mismas premisas. Al mismo tiempo, la opción que se perfilaba como alternativa política y económica (el macrismo) no tenía entre sus prioridades la continuidad del mismo proyecto, por lo menos de las políticas que hasta entonces lo habían sustentado.

De cualquier modo, si había dos modelos de sociedad en pugna, si se perfilaban dos maneras diferentes de entender el crecimiento económico del país, si se pensaban en diferentes esquemas productivos y de relacionamiento

con el mercado interno y externo, ninguno de los dos polos antagónicos parecía manifestar, en forma certera y acabada, cómo iba a hacer para continuar y profundizar el modelo (en el caso de quienes hasta ese momento estaban en el poder) o de qué manera iban a modificar el mismo y hasta donde lo harían (en el caso de la oposición). La comunicación fiel y concreta de los fundamentos estructurales, del camino a seguir y de los objetivos de cada modelo puede poner a la sociedad en un estado de debate que, en muchas ocasiones, las fuerzas políticas no parecen poder controlar a su favor. Fue así que, eludiendo esos grandes debates, el progresismo en el gobierno avanzó sinuosamente, serpenteando las dificultades y acomodando las políticas a los vientos que le permitieran sostenerse en el poder, y a la vez asegurar, desde allí, cierto nivel de bienestar de la población. Por su parte, el neoliberalismo, impone consignas de progreso y bienestar individual como verdades que, por su simpleza parecen no dar lugar a ningún debate, pero oculta permanentemente los resultados de esas consignas ejecutadas como políticas y sus objetivos finales. En cierta forma, fue ese el planteo comunicacional elegido por la Alianza Cambiemos para las elecciones de 2015 que le darían la victoria.

En estas situaciones, los discursos políticos son ambiguos, unos y otros no expresan todas sus diferencias, ni abren absolutamente el debate acerca de sus fundamentos y objetivos principales. Fundamentalmente, uno de los aspectos que generalmente se oculta es que en ambos tipos de sociedad posible sus resultados finales resultan de conflictos, de luchas, donde los trabajadores ocupan el

lugar de protagonistas principales: en una de ellas como ganadores y en otra como absolutos perdedores. Y que, en definitiva, la determinación de la existencia de una u otra sociedad, es también el resultado del conflicto entre dos sectores sociales: los que se van a enriquecer desmesuradamente si el neoliberalismo rige las normas económicas, sociales y políticas; frente a quienes van a sostener o mejorar relativamente su condición de vida en el caso que los representantes de esa ideología no lleguen al poder y pueda hacerlo una fuerza popular que represente sus intereses.

Si el conflicto no es puesto en el centro de la política, si las conquistas de los trabajadores ya no son vistas como tales, lo que se produce es su naturalización y, con ella, la del bienestar alcanzado por esa misma vía. Entonces, la llegada de unos u otros al poder puede parecer indiferente, aún para aquellos que pueden verse fuertemente perjudicados.

Asimismo, dicha naturalización puede también ser el resultado de la garantía y cumplimiento en el tiempo de ciertos derechos sociales. A partir de ello, los trabajadores pueden sentir una sensación de apropiación permanente e inalienable de esos derechos y del bienestar resultante. De esta forma, puede diluirse la conciencia de la conquista y del conflicto como espacio de disputa, como razón de ser del bienestar y como fuente de su propio sostenimiento.

Otro elemento de naturalización puede deberse también a que, un bienestar prolongado, genera las condiciones para que un número importante de las personas beneficiadas sean trabajadores jóvenes, cuyo ingreso al empleo haya ocurrido durante dicho periodo y que,

por lo tanto, no hayan vivido experiencias anteriores signadas por el desempleo y situaciones de pobreza que limitaran sus posibilidades de crecimiento económico y desarrollo personal. La percepción de que los logros obtenidos se deben al esfuerzo individual, y que las condiciones de bienestar resultan así externas al contexto político y económico, puede ser mayor en estos trabajadores que entre aquellos que atravesaron circunstancias de crisis económica y que tuvieron que convertirse en protagonistas directos de la conflictividad social producida en ese contexto.

Estas circunstancias son aprovechadas y utilizadas por el neoliberalismo para acceder al poder. Generalmente, su arribo al Estado coincide con la búsqueda de una salida a alguna crisis económica de gran magnitud que, en muchos casos, suele ser impulsada por la presión interna de los personeros económicos de esa misma ideología y la inestimable colaboración externa de los organismos internacionales de crédito y de gobiernos de países con intereses en el territorio nacional. En función de crear dichas condiciones, lo que se requiere es, en primer lugar, generar una sensación de desasosiego y desesperanza en la población. Al mismo tiempo, contar y circular una serie de diagnósticos de economistas del establishment, presentados como “serios” y “objetivos” por intelectuales y periodistas ligados a esos mismos intereses, adjudican todos los males a las políticas que anteriormente se dirigían a generar ciertas condiciones de bienestar para los sectores de menores recursos, tachándolas de populistas y poco fundamentadas en lo que denominan como la “economía real” o la

lógica del mercado. Así desde los discursos hegemónicos se comienza a instalar la idea de que el bienestar alcanzado en el periodo anterior, al sostenerse esencialmente en la acción del Estado desde su rol de gestor de políticas sociales e intervenciones sobre el mercado, resulta distorsivo y perjudicial en el largo plazo. De esta manera, se instala desde el liberalismo, que las únicas políticas económicas posibles y eficientes serían aquellas destinadas a fomentar la inversión privada (la única que es considerada genuina), la cual permitiría extender el bienestar, derramando empleo de calidad (otra vez, únicamente el privado) salarios elevados y mejores niveles de consumo a toda la población. Desde allí se espera que, con la promesa de un bienestar futuro excepcional, la población acepte perder lo alcanzado hasta ese momento y se sacrifique coyunturalmente en función de ese porvenir que se promete venturoso.

La experiencia pasada y los inicios del nuevo gobierno, demuestran que el neoliberalismo en el poder comienza rápidamente a poner en marcha recetas económicas ya conocidas (asentadas fundamentalmente en la libertad de mercado y la prioridad del interés privado), mediante las cuales desestructura gran parte de los derechos sociales que conformaban el andamiaje del esquema de bienestar alcanzado en años anteriores por los gobiernos progresistas o “populistas”. Pero, la disputa entre los dos modelos de sociedad se encarna no sólo en términos políticos y económicos, sino fundamentalmente culturales. El avance discursivo y hasta, en algunos casos represivo, sobre patrones culturales que pueden, según ese mismo discurso, en-

carñar o representar prácticas heredadas del populismo, plantea una profunda división en la sociedad. En cierto sentido, a lo largo del tiempo, se vuelve expresar la escisión originaria de los pueblos latinoamericanos, entre quienes se apoderaron de las tierras y las usufructuaron a su favor durante siglos y quienes conformaron la mano de obra barata y empobrecida a disposición de esas clases dominantes. Si las condiciones para esta apropiación significaron el despliegue estatal de una desmesurada violencia sobre los pueblos originariamente dueños de esas tierras, esa violencia puede ser un recurso válido para el sostenimiento del poder de los dueños actuales. Asimismo, el planteo descarnado de la división entre dos sectores contrapuestos puede ser hoy absolutamente peligroso, dado que puede someter a la población a situaciones de violencia que resulten incontrolables. En este sentido, cuando se reflexiona acerca de la violencia engendrada por un gobierno y la respuesta social que ello puede generar, los acontecimientos de 2001 en Argentina pueden ser un elemento a tener en cuenta. El problema actual es que, en este caso, puede no tratarse de un enfrentamiento entre una parte de la sociedad y un gobierno, ya que el neoliberalismo está tratando de enfrentar a dos partes de la misma sociedad, como parece suceder en varios países de Latinoamérica. Si, tal como se argumenta en Argentina, desde el discurso neoliberal, el gobierno denominado como “populista” fue el generador de “la grieta” en la sociedad (escisión que antes adjudicamos al mismo origen de la Nación), lo que se pretende, desde el neoliberalismo reinante es agigantarla, quizás con la esperanza que la

misma termine deglutiéndose a sus oponentes, para dar lugar a lo que esa misma perspectiva ideológica considera como una “nueva cultura”. Pero, el problema es que esa nueva cultura viene de la mano de distintas formas de violencia: la generada por el propio Estado, mediante políticas económicas que multiplican las inequidades sociales; la que se produce en el seno de la misma sociedad, en forma fragmentada e individualizada, como expresión de lazos sociales que se resquebrajan, quizás como resultado de la incertidumbre y el mal humor

social que generan esas mismas políticas; luego, la que produce otra vez el Estado para contrarrestar las protestas sociales; y finalmente la que puede desencadenarse como resultado de la concentración y aceleración, en tiempo y espacio, de los enfrentamientos anteriores. En este sentido, es posible que, para poder comprender estas coyunturas sociales resulte cada vez más necesario estudiar cómo y por qué se despliegan esas violencias en la sociedad y cuáles pueden ser sus consecuencias de mediano y largo plazo.